

**E**

Editorial

El espacio público no es un desguace

La persistencia de chatarra y automóviles en desuso en las calles de Osorno afecta la estética urbana y constituye un foco de inseguridad para los vecinos.

El fenómeno de los vehículos abandonados en la vía pública de Osorno ha dejado de ser un problema meramente ornamental para transformarse en una crisis de seguridad y convivencia ciudadana. A pesar de los esfuerzos municipales, que ya contabilizan más de un centenar de retiros en lo que va del año y una proyección de continuar despejando las calzadas, la realidad en los barrios evidencia una dinámica de nunca acabar: por cada automóvil que la grúa traslada al corral municipal, otros parecen ocupar su lugar casi de inmediato.

La problemática es profunda y multidimensional. En Rahue Alto, Santa María y Pinto, entre otros barrios, las calles y veredas se han convertido en extensiones informales de talleres mecánicos o en cementerios de proyectos de reparación que nunca concluyeron. Este uso indebido del espacio común vulnera el derecho al libre tránsito y, lo que es más grave, pone en riesgo la vida de los residentes. Cuando una ambulancia o un carro de bomberos no puede acceder a un pasaje debido a la presencia de chatarra acumulada, el abandono deja de ser una falta administrativa para convertirse en una amenaza latente.

Desde el punto de vista de la seguridad, el diagnóstico de los dirigentes vecinales es lapidario. Estos "autos fantasma" se degradan rápidamente hasta convertirse en guaridas para la delincuencia, refugios improvisados para personas en situación de calle o focos de insalubridad. Resulta preocupante, además, la aparición de conductas astutas por parte de algunos propietarios, quienes mantienen los vehículos limpios superficialmente para simular un uso inexistente y así evadir la fiscalización.

Si bien la gestión municipal ha mostrado avances significativos mediante licitaciones de retiro y remates de chatarra para liberar espacio en los depósitos, la solución definitiva no parece estar sólo en la capacidad de carga de las grúas. La situación actual sugiere que es imperativa una fiscalización más rigurosa hacia los talleres que operan en la vía pública y, sobre todo, un cambio en la cultura de responsabilidad de los propietarios. El espacio público es un bien compartido que pertenece a todos los ciudadanos y puede seguir siendo utilizado como un desguace personal a costa de la calidad de vida de la comunidad.